

**REVISIÓN DE LA LITERATURA DE LA RELACIÓN ENTRE CONFLICTO
ARMADO Y EDUCACIÓN EN COLOMBIA.**

Autor:

María Julieth Palacios Tovar

Código

2101246



**Universidad Militar Nueva Granada
Facultad de Ciencias Económicas
Programa de Economía
Año 2017**

REVISIÓN DE LA LITERATURA DE LA RELACIÓN ENTRE CONFLICTO ARMADO Y EDUCACIÓN EN COLOMBIA*.

María Julieth Palacios Tovar**
Universidad Militar Nueva Granada

Resumen

Durante los años sesenta, con el inicio del conflicto armado en Colombia, se empezó a evidenciar la relevancia de estudios acerca del impacto de la violencia en la educación. El presente artículo realiza una revisión sistemática de la bibliografía empírica de la relación del conflicto armado y la educación en Colombia. En particular, se analiza la relación del conflicto armado con la cobertura y calidad educativa, la deserción escolar y las políticas educativas. En últimas, este documento muestra que la intensificación del conflicto armado en Colombia ha aumentado la desigualdad en las oportunidades educativas.

Palabras clave: Educación, conflicto armado, deserción escolar, política pública, calidad de la educación.

Clasificación JEL: A29, I29, I31, J11, I28

Abstract

During the 1960s, with the beginning of the armed conflict in Colombia, the relevance of studies on the impact of violence on education began to be evident. This article carries out a systematic review of the empirical literature on the relationship between the armed conflict and education in Colombia. In particular, the relationship between the armed conflict and educational coverage and quality, school desertion and educational policies is analyzed. Ultimately, this document shows that the intensification of the armed conflict in Colombia has increased inequality in educational opportunities.

Keywords: Education, armed conflict, school dropout, public policy, quality of education.

JEL Classification: A29, I29, I31, J11, I28

*Este es un artículo de revisión. Producto derivado del proyecto de investigación ECO 2324: "Incidencia del conflicto armado en la educación de los colombianos" financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, vigencia 2017. Artículo Asesorado por la docente Adriana Carolina Silva Arias.

**Estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada, facultad de Ciencias Económicas, Programa de Economía. Código: 2101246. U2101246@unimilitar.edu.com

1. Introducción

En los siguientes apartados se presentan los principales enfoques teóricos que relacionan los efectos del conflicto armado con algunas condiciones educativas de los menores de edad inmersos en contextos violentos. En específico, el propósito de este documento es realizar una revisión de la literatura acerca de la relación de la violencia con la deserción, la desigualdad de oportunidades y la cobertura educativa de los niños y jóvenes (McGill et al., 2014).

En la actualidad, los conflictos armados están aumentando las desigualdades, entre ellas las educativas (Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, 2011). Una gran parte de los actores del conflicto armado son niños y jóvenes. En Colombia para el año 2002, los menores de edad reclutados por grupos insurgentes sumaban al menos 10,000, quienes en lugar de estar incrementando su capital humano dedican su vida a grupos al margen de la ley (González, 2002). La literatura de la economía de la educación ha evidenciado que existen diferencias en los retornos educativos como consecuencia del incremento en el escalamiento del conflicto armado (Ordaz, 2007).

Este documento realiza una revisión de la literatura que aborda la relación entre el conflicto armado y la educación en Colombia. Esto pretende dar a conocer la incidencia de la violencia en diferentes ámbitos, en este caso en el desempeño educativo (Jaramillo, 2012). Al respecto, cabe destacar que el número de estudios sobre el impacto de la exposición de los niños y jóvenes a la violencia sigue siendo limitado (Osofsky, 1999). En general, se sabe muy poco acerca de los niños en los conflictos armados (Pedersen & Sommerfelt, 2007).

En este proyecto se identifican al menos cuatro enfoques que se abordan en la literatura para el estudio de la incidencia del conflicto armado en los retornos de la educación los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

Tabla 1. Enfoques para analizar la incidencia de la violencia en la educación

Enfoque	Características	Autores
Cobertura Educativa	Baja cobertura educativa en las zonas de alto conflicto armado, aunado a la baja inversión en educación por parte del Estado y un mayor gasto en defensa	Osorio (2001); Slezic (2011); Méndez Palacio, Calderón & Fernanda (2007)
Deserción Escolar	Analiza la relación entre los aumentos de niveles de conflicto armado con una mayor deserción escolar, debido entre otros, al reclutamiento y a la creciente inseguridad en las zonas de confrontaciones armadas	REMAP (2011); Arias (2010); Osofsky (1999)
Calidad de servicios educativos	Baja calidad en los servicios educativos para los niños y niñas víctimas del conflicto armado, debido a que la calidad en la educación está acorde con la capacidad de pago de los usuarios. Esta estratificación ha implicado que en la competencia por un cupo educativo, tengan muchas más ventajas los jóvenes de sectores medio-alto y alto, avocando a los jóvenes provenientes de hogares desplazados forzados con condiciones socioeconómicas desfavorables a acceder a una educación de baja calidad.	González (2016); Vargas, Gamboa & García (2014)
Políticas Educativas	Aglutina los estudios acerca del impacto de las políticas educativas en contextos de violencia. Algunas políticas educativas han instaurado dispositivos de exclusión, como las pruebas estandarizadas, los gastos educativos, que desconocen las condiciones de desigualdad de oportunidades entre los estudiantes víctimas del conflicto armado colombiano	Márquez (2014); Chaux (2009); Quintero & Mejía (2016).

Esta revisión es relevante, debido a las implicaciones que podría tener el conflicto armado en el desarrollo y crecimiento económico. Por tanto, es indispensable que a las jóvenes víctimas del conflicto armado se les garantice una educación de calidad, con el propósito de garantizar el bienestar presente y futuro, rompiendo los círculos viciosos de exclusión y pobreza (Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, 2011a). Además, en el actual escenario del posconflicto en Colombia, en el cual se cuestionan los beneficios de reducir el conflicto armado, resulta relevante realizar una revisión a la literatura de la incidencia del conflicto armado en la educación de los colombianos.

Por otro lado, en la Constitución Nacional se establece el derecho a la educación en Colombia, pero no es garantía para que niños y jóvenes logren acceder a ella, a pesar de la importancia que adquiere, aún más para los menores que han sido víctimas del conflicto

armado. El desinterés, la estigmatización y la exclusión social, económica y política de las víctimas del conflicto armado han incrementado la desigualdad en las oportunidades educativas (Arias, 2010).

Así mismo, en un país como Colombia se hace relevante realizar una revisión de la literatura acerca de la incidencia del conflicto armado en la educación. Al respecto, la consecuencia de los conflictos armados en la educación se trata de una crisis que se encuentra encubierta, la cual fortifica la pobreza, transgrede el crecimiento económico y retarda el progreso de las poblaciones. Estos conflictos han producido en los sistemas educativos efectos destructores de los que se conoce muy poco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, 2011b).

2. Enfoques relacionales del conflicto armado con la educación

La educación es un elemento clave para el aumento de la productividad, debido a que es un canal importante que determina los salarios que los individuos podrán alcanzar en el mercado de trabajo. Esto también influirá en los niveles generales de ingreso y distribución de la riqueza en un país.

Una de las características más devastadoras de los conflictos armados es el daño que causan al sistema educativo (Márquez, 2014). Por tanto, es crucial determinar los costos sociales que conlleva el conflicto armado, con el propósito de aplicar políticas adecuadas que permitan abordar directamente esta problemática (Rodríguez, Sánchez, 2012).

El gasto en defensa y la inversión en educación son variables que se hacen parte del presupuesto nacional, por lo que probablemente lo que se deja de invertir en infraestructura y programas educativos, se puede asignar a los gastos en defensa y atención humanitaria a los desplazados. Por tanto, si aumenta la intensidad del conflicto armado, las entidades estatales deben realizar un mayor gasto en el sector defensa y disminuir la inversión en otros sectores como el educativo (Osorio, 2001).

En efecto, existe una amplia literatura dedicada a analizar que los conflictos armados están ocasionando la reducción de los fondos públicos dedicados a la educación, debido a que se aumenta el gasto militar (Márquez, 2014). A nivel internacional existen veintiún países en desarrollo que generan un gasto mayor en armamento que en educación. Si se llegara a recortar su gasto militar en un 10%, estos países podrían brindar educación a 9,5 millones de niños que no acceden a la educación (Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, 2011a).

Al respecto, todavía existen importantes brechas de conocimiento acerca de los efectos del conflicto armado sobre la calidad de la educación, medidos por el rendimiento académico y

los mecanismos subyacentes a esos posibles efectos, en particular para los estudiantes (Brück, Di Maio & Miaari, 2014). El conflicto armado y el mayor peso demográfico de los jóvenes en la sociedad, aunado a la baja calidad educativa, es un punto de riesgo para el bienestar actual y futuro de la sociedad. Los métodos de educación en algunos países que han sido afectados por conflictos armados, no brindan a los niños y jóvenes las capacidades que les permitan ocuparse y salir de la pobreza (Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, 2011b).

Además, los niños y jóvenes expuestos al conflicto armado desde tempranas edades, tienen un mayor riesgo a desarrollar síntomas de estrés postraumático, lo cual tiene, entre otros, un impacto negativo en su desempeño académico. Igualmente, la literatura sugiere que la exposición a la violencia también afecta negativamente el funcionamiento y la calidad de las escuelas (Defensoría del Pueblo, 2014).

2.1. Cobertura educativa y conflicto armado

En algunos países, las consecuencias del conflicto armado son diferentes según el área y el grupo de población que se considere. En general, los conflictos armados imposibilitan los adelantos de la educación y aumentan las brechas educativas (Slezic, 2011). En esta sección, se presenta la relación entre la baja cobertura educativa en las zonas afectadas por el conflicto armado, con el consiguiente incremento de la vulnerabilidad social presente y futura para la población de estas zonas en disputa.

Teniendo en cuenta lo anterior se tiene que un principio básico de los derechos humanos es proveer educación a todos los habitantes, ya sea que se encuentren en zonas rurales de conflicto, o en zonas urbanas. Esto significa, que se debe responder a las necesidades comunes y específicas de la población en general, sin discernir por su condición geográfica y cultural (Ministerio de Educación Nacional, 2004).

Así, el Estado ha realizado esfuerzos para garantizar el acceso a los establecimientos educativos para los niños y jóvenes directa e indirectamente relacionados con el conflicto armado, como ejemplo tenemos la constante presencia del ejército Nacional en los campos minados para procurar la integridad y que los estudiantes puedan acudir a sus recintos educativos, incluir en sus planes de estudio un programa de alimentación para brindar apoyo a los niños y jóvenes expuestos a la guerra, entre otros. No obstante, este aumento en la cobertura en el afán de incluir a estos niños, ha generado que los menores reciban clases en salones con espacios reducidos, dando como resultado hacinamiento, ocasionando que desaprovechen la capacidad de concentración y que se generen conflictos entre ellos mismos. Adicionalmente, en la búsqueda de aumentar la cobertura se ha debilitado la relación entre el profesor y los estudiantes, la cual es esencial para el progreso social e intelectual de niños y jóvenes (Méndez, Calderón & Fernanda, 2007).

Las problemáticas educativas del sector rural que ha abordado el Estado, se centran en la baja cobertura. No obstante, en las zonas de conflicto armado se han descuidado otras problemáticas tales como el nivel educativo, la calidad y oportunidad de un servicio educativo, ya que no suple las necesidades sociales y dado que las instituciones educativas no son un agente de transformación. Esta situación ha ocasionado un aislamiento del sistema educativo, un bajo nivel de escolarización, altos índices de deserción escolar y de repitencia estudiantil, lo cual a su vez genera un alto impacto en los niveles de pobreza, impidiendo así el pleno ejercicio de sus derechos (Asocajas, 2016).

El sector rural, que es la zona que más se encuentra inmersa en el conflicto, proviene principalmente de la actividad económica agropecuaria. Lo anterior, sumado a los cambios políticos y el conflicto armado constante, han conllevado a una disminución en el empleo, disminuyendo de esta manera los ingresos reales de la población rural, generando que se redujera la inversión en educación y la disminución en la cobertura educativa para niños y jóvenes, aumentando el desplazamiento de la población campesina, el abandono de actividades productivas y que algunos menores se unan a las filas de los actores armados (Perfetti, 2004).

En Colombia, según el Ministerio de Educación Nacional (2002) los 2'300,126 niñas y niños que estudian en las zonas rurales necesitan de profesores conocedores del contexto rural. El área rural es la que posee una más baja cobertura educativa, en especial los cursos de preescolar y básica secundaria. Además, las escuelas se encuentran dispersas debido a las condiciones geográficas, escolares en extra-edad, problemas de convivencia, extrema pobreza, y sobre todo por el conflicto armado.

Por su parte, la Corte Constitucional señala que los principales problemas educativos causados por el conflicto armado interno se presentan en la cobertura, acceso, permanencia, flexibilidad y adaptabilidad al sistema. Más allá de la garantía del derecho a un cupo o del nivel de gratuidad en la matrícula, son relevantes los aspectos relativos a la adaptabilidad y la oportunidad de la educación para esta población. Por tanto, se constituye en un reto proponer políticas educativas para que sean pertinentes dadas las características de la población víctima del conflicto armado (Arias, 2010)

La cobertura es el resultado del acceso de niños y jóvenes al sistema educativo, así como de su permanencia. La cifra de estudiantes que se escolariza es mayor al número de aquellos que terminan un grado y al de quienes llegan al nivel de educación media. La persistencia generalmente no es continua, lo que alarga el tiempo para poder cumplir los ciclos educativos (Ministerio de Educación Nacional, 2012).

Además, debido al constante conflicto en las zonas principalmente afectadas por la violencia, los establecimientos de cobertura nacen como “escuelas de garaje”, en casas de

familia, dedicadas a cuidar y educar a los hijos de estas familias expuestas, y las cuales poco a poco se fueron constituyendo en instituciones formales. Actualmente, permanecen algunos establecimientos a medio construir que funcionan en pequeños lugares, sin áreas adecuadas para el descanso y la recreación y con salones estrechos saturados de estudiantes (Lasso, 2013).

2.2. *Deserción Escolar y Conflicto Armado*

Las dificultades relacionadas con el conflicto armado y la garantía del derecho a la educación, en cuanto a la asequibilidad y accesibilidad son: la deserción escolar, las dificultades que pasan los habitantes desplazados para ingresar a las escuelas, el ausentismo escolar por parte de la población infantil y adolescente desplazada forzada debido a la necesidad de trabajar o conseguir recursos para la supervivencia económica de los hogares (Arias, 2010).

La literatura internacional que estudia el impacto de la exposición al conflicto y la violencia evidencia que los niños y jóvenes inmersos en estos contextos, es más probable que lleven armas a la escuela, tienen mayor incidencia de peleas entre estudiantes, menores tasas de matrículas, asistencia y graduación, así como puntuaciones más bajas en las pruebas (Osofsky, 1999).

Otra vertiente de la literatura se ha centrado en los efectos de los conflictos armados prolongados como el colombiano. Se ha demostrado que los conflictos armados tienen fuertes efectos a largo plazo sobre las tasas de finalización de la escuela primaria. Por ejemplo, enfocándose en Colombia, se observa que es menos probable que los varones adolescentes estén matriculados en la escuela secundaria, en relación con las niñas, cuando la incidencia de la violencia es alta (Romano, 2015).

Las cifras de deserción escolar en Colombia son cada vez más altas, el desplazamiento interno de familias, la falta de recursos y el exiguo apoyo del Estado a las víctimas del conflicto armado, son algunas de las causas primordiales para que los niños y jóvenes abandonen las escuelas (Chamorro, 2013).

Uno de los principales propósitos del Estado es llevar a las instituciones a los niños y jóvenes que por circunstancias coyunturales del país y por los contextos particulares, se han visto excluidos y separados del sistema. Asimismo, evitar que siga existiendo deserción escolar, y que con el tratado de paz firmado y la consiguiente disminución del escalamiento del conflicto armado, los niños puedan empezar o continuar su trayectoria educativa (Méndez et al., 2007).

Adicionalmente, la adaptabilidad escolar para prevenir la deserción de niños y jóvenes víctimas del conflicto armado es una responsabilidad del Estado. Así, es por medio de las instituciones educativas que se debe lograr que los niños y jóvenes permanezcan en las aulas, adecuando las condiciones a sus necesidades particulares. En específico, se considera necesario el respeto a la diferencia y a las diversas situaciones de los más de 14,000 niños y jóvenes registrados en el 2003 que se encontraban en las filas de las guerrillas colombianas (Romero, 2013).

En este mismo estudio se evidencia que, la baja accesibilidad a los planteles educativos en las zonas de conflicto armado, aunado a los 62,5% de territorios expuestos a minas antipersona y al aumento progresivo de víctimas por el conflicto, ha ejercido presión para que los niños y jóvenes deserten de la escolaridad y tienen mayor probabilidad de ser reclutados por la insurgencia

Adicionalmente, otras causas de la deserción escolar asociadas con el conflicto armado son la escasez de recursos, el desplazamiento forzado, las transgresiones al Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores armados y debido a la incorporación de niños y jóvenes en actividades propias del narcotráfico (Montoya, 2008).

El desempleo y el conflicto armado, como causas de deserción escolar, no son problemas que se puedan resolver, por lo menos de manera directa, desde las escuelas y colegios del país. No obstante, la falta de interés de los estudiantes por el sistema educativo, también conlleva a que algunos niños y jóvenes tomen la decisión de ingresar a los grupos al margen de la ley (Gómez, 2002).

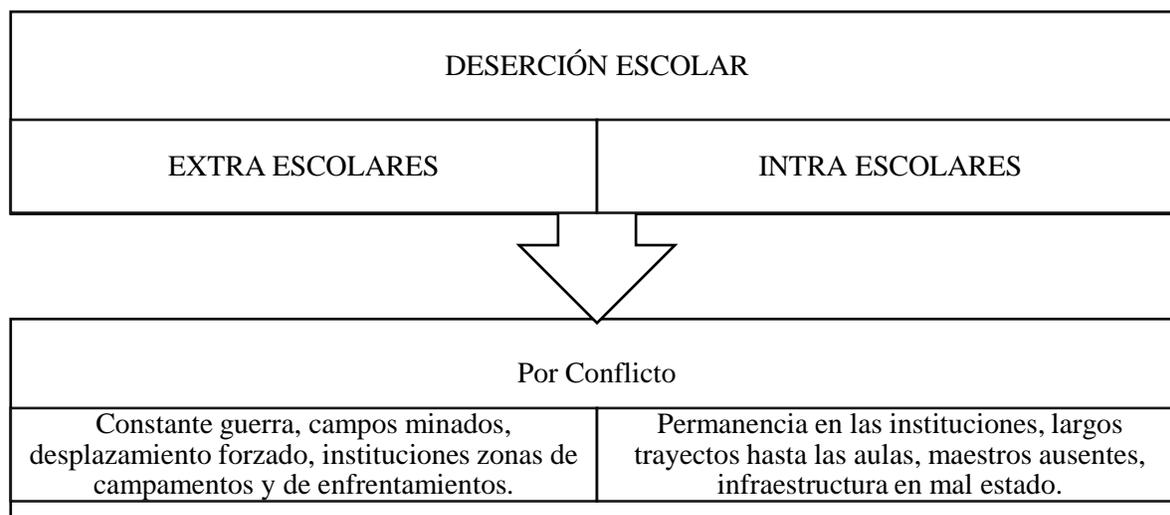
El desplazamiento forzado, en algunos casos ha ocasionado la deserción parcial o definitiva de las actividades escolares. Esto ocurre por la destrucción de la infraestructura pedagógica y la amenaza de grupos armados, lo cual ha afectado a estudiantes, maestros y directivos de las escuelas rurales del país (Perfetti, 2004).

En este sentido, las escuelas de las zonas rurales afectadas por el conflicto armado, frecuentemente han sido objeto de ataques directos de los grupos armados. Igualmente, los actores armados han usado las instalaciones educativas como campamentos temporales, en ocasiones impidiendo el uso escolar, generando así la deserción escolar. Además, el camino para llegar a la escuela podría estar sembrado de minas y restos explosivos, por lo que la escuela estaría lejos de constituirse en un entorno protector (González, 2016).

Una de las cuestiones primordiales en torno a la educación en entornos de conflicto armado es la adaptabilidad al entorno, que consiste en generar habilidades, técnicas y acciones para garantizar la permanencia. De esta manera, el Estado debe garantizar que el sistema educativo tenga asistencia habitual de los estudiantes a la escuela, una presentación

eficiente y continua del servicio educativo, evitar la discriminación, y aumentar la permanencia de niños y jóvenes en los centros educativos, que a su vez logren la adaptabilidad en la sociedad (Arias, 2010).

Gráfico 1. Causas y consecuencias de la deserción escolar por el conflicto armado



Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión.

La deserción escolar ocurre por diversas situaciones. Los estudiantes temen que sus escuelas sean atacadas, o si ya han sido atacadas, optan por quedarse en casa para no ser víctimas del conflicto armado. Otra causa, es que los estudiantes preocupados por su seguridad pueden tener dificultades para concentrarse. Como resultado, puede afectarse su logro y avance educativo. Por otra parte, los estudiantes que permanecen en casa pueden quedarse atrasados, y los estudiantes que se quedan atrás corren mayor riesgo de abandonar los estudios (Grogger, 1997). Esto ocasiona que los niños y jóvenes se interesen cada vez menos en la educación, lo que puede llegar a ser un factor que afecte directamente la salud física y mental de estos niños y jóvenes (McDonald, Deatrck, Kassam-Adams & Richmond, 2011).

2.3. Calidad Educativa y conflicto armado

Una educación con acceso y calidad contribuye a la construcción de la paz por su capacidad de ofrecer dividendos rápidos y tangibles a las poblaciones. Además, la calidad educativa favorece la legitimidad de las instituciones y crea oportunidades para lograr la transformación de un entorno social en conflicto armado. La contribución de la calidad educativa a la paz estaría medida por cuatro factores: la inclusión, la socialización, el capital social y los beneficios sociales que trae consigo (Gonzáles, 2016).

La investigación acerca del impacto de los conflictos sobre la calidad de la educación es escasa. No obstante, las consecuencias apuntan a que el conflicto armado aumenta la desigualdad de oportunidades en el logro educativo. Al acrecentar las tasas de deserción escolar, el conflicto crea una selección positiva de los estudiantes que presentan mayor destreza y esfuerzo, frente a los estudiantes que desertan del sistema educativo. Esto apunta a que se debe tener cautela al analizar los modelos de equidad en educación basados en resultados, en lugar de procesos (Vargas, Gamboa & García, 2014).

En materia de calidad, en contextos de alta incidencia del conflicto armado se debe garantizar el mejor escenario para que los niños y jóvenes habitantes del sector rural puedan competir en términos equitativos (Ministerio de Educación Nacional, 2012). Hasta ahora, la calidad se ha medido en términos de cantidad de cupos, pero se deben adoptar otras medidas necesarias en estos contextos como subsidios de alimentación o refrigerios, para motivarlos y poder generar las condiciones para un aumento en la calidad educativa (Méndez et al., 2007).

El Ministerio de Educación Nacional ha planteado una estrategia mezclada entre calidad y cobertura que promuevan políticas de cuidado concretas, las cuales proponen la diligencia de varios modelos formativos para las plazas más vulnerables. La calidad de las instituciones motiva a los niños y jóvenes para que se sientan cómodos y tengan incentivos para ir y permanecer en las aulas (Ministerio de Educación Nacional, 2014).

El conflicto armado ha logrado generar una brecha amplia entre las poblaciones. Por un lado, se encuentran las expuestas directamente al conflicto armado, y otras como las urbanas que son indirectamente afectadas. La desigualdad social generada por el conflicto, ha ocasionado que la educación también se quebrante y existan dos extremos, la educación rural y la urbana. El Estado se ha concentrado en la cobertura, en el 2015 se alcanzó el 85% de la cobertura en educación, pero falta la calidad para mantener motivados e interesados a los niños y jóvenes, especialmente en los contextos violentos (López, 2017).

En cuanto a la calidad, las instituciones y los estudiantes en zonas rurales han demostrado avances significativos en la expansión y fortalecimiento de los modelos educativos. No obstante, la brecha en la desigualdad educativa entre la zona rural y urbana es alta, con lo siendo los progresos insuficientes para asegurar el mandato constitucional de ofrecer educación a toda la población (Perfetti, 2004)

Dentro del componente de calidad, durante el 2002 el Ministerio de Educación Nacional planteó el Proyecto de Educación para el Sector Rural (PER), en el cual se contempla un subcomponente de Escuelas Normales Superiores (ENS). Este proyecto busca transformar los currículos de las instituciones, con el propósito de que incluyan en la formación docente

la certificación para atender las insuficiencias educativas de las zonas expuestas al conflicto armado (Ministerio de Educación Nacional, 2002).

Las instituciones deben hacer un esfuerzo para lograr que la educación rural pueda tener calidad y contribuir a la paz. El Estado debe velar por mejorar la infraestructura, aumentar el presupuesto, mejorar las condiciones de los maestros, bajar los niveles de riesgo de seguridad para los estudiantes y optimizar la calidad del sistema educativo rural, para que la inclusión sea efectiva (González, 2016).

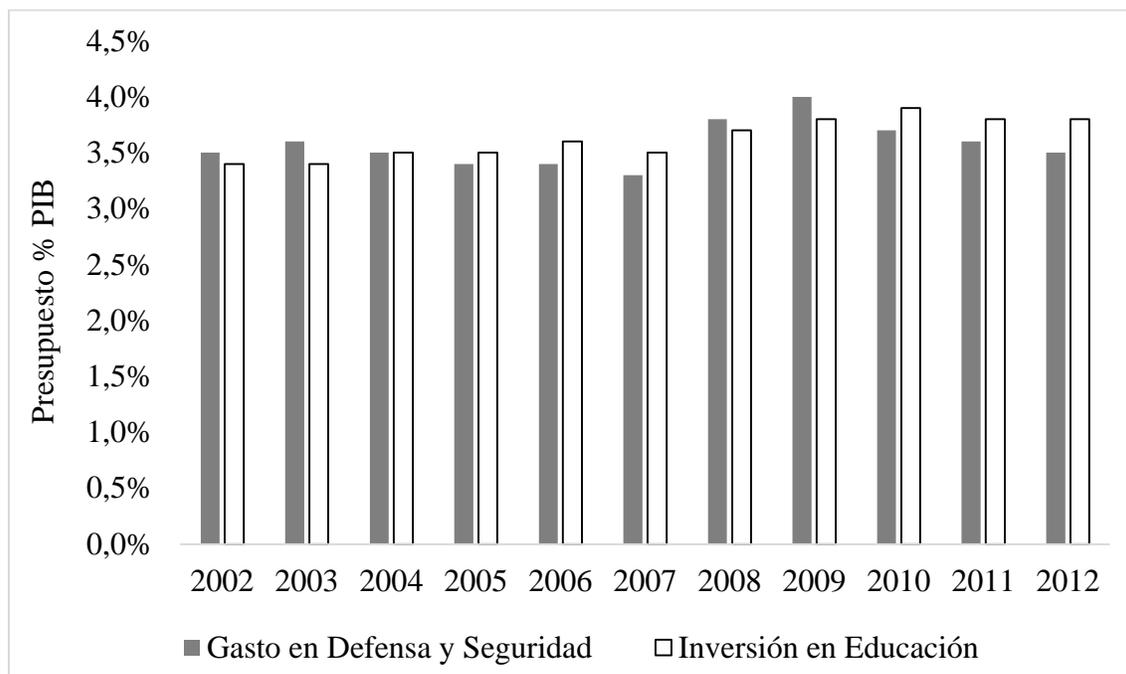
Por otra parte, tenemos a los maestros los cuales se encuentran directamente relacionados con esta situación de conflicto, la cual determina una cultura de violencia en la que no solo se alteran las formas de enseñar, sino que también repercuten en la forma en cómo actúan ellos mismos. Lo anterior debido a que uno de los efectos inmediatos del conflicto armado es el abandono de los maestros por temor a que sus vida se vean afectadas (Lizarralde, 2003), aumentando el número de estudiantes por salón, evitando una educación más personalizada.

El aumento progresivo de la violencia hacia los estudiantes, profesores y demás trabajadores del sistema educativo ha ocasionado una disminución en la calidad de la educación. El número de estudiantes y maestros que han sido asesinados y atacados, muchos dentro de las instituciones educativas, ha generado una disminución en las tasas de asistencia a los recintos (Bhattacharya et al., 2011).

2.4. Políticas Educativas en contextos de violencia

El acceso a la educación ha sido una fuente prolongada de desigualdad, tensión y conflicto (Verwimp & Van Bavel, 2013). La importancia de la calidad e igualdad en las oportunidades educativas es ahora evidente para la sociedad. Existen numerosos canales a través de los cuales el conflicto armado puede afectar la calidad y la igualdad en las oportunidades educativas. A medida que aumenten los niños y jóvenes que decidieran abandonar la educación por el conflicto armado podría disminuir la calidad educativa de las escuelas, debido a los daños que pueda ocasionar a la infraestructura o a una disminución en el número y calidad de profesores, así como los materiales educativos en las zonas de conflicto armado (Rodríguez, Vega, Alvis & Castro, 2011).

Gráfico 1: Inversión en Educación y Gasto en Seguridad en Colombia (2002-2012)



Fuente: Elaboración propia a partir de Delgado (2014).

Dado el anterior gráfico, se puede deducir que la inversión en políticas educativas ha llegado a pasar a un segundo plano consecuencia del conflicto armado que se vivió hasta el año 2016. Como se ha mencionado durante esta revisión de la literatura y ha sido reafirmada por este esquema la relación directa entre estas dos variables generan un impacto negativo en el crecimiento y desarrollo económico del país.

De otra parte, se tiene que las circunstancias observadas es la deserción por parte de los niños y jóvenes desplazados forzados, debido a que no poseen los suficientes recursos para poder acceder a los útiles escolares. Igualmente, algunos niños y jóvenes tras el desplazamiento tienen problema para adaptarse a las jornadas y rutinas, generando poco interés en las actividades escolares (Méndez et al., 2007).

Algunas de las políticas educativas implementadas en Colombia son: el Sistema de Aprendizaje Continuada Cafam, la Telesecundaria, el Servicio de Educación Rural, la jornada escolar ampliada y la aceleración del aprendizaje. Estas políticas han sido diseñadas bajo criterios de flexibilidad y creatividad, con la intención de lograr acrecentar la cobertura y la calidad educativa (Ministerio de Educación Nacional, 2014).

La accesibilidad, hace referencia a las políticas y oferta pública. El Estado debe garantizar la financiación y disminuir la desigualdad educativa. Así, el compromiso del Estado es que existan escuelas, colegios e instituciones a disposición de todos los niños y jóvenes,

especialmente los que han sido expuestos al conflicto armado. En 2004, el Ministerio de Educación de Colombia lanzó su Programa Nacional de Competencias Ciudadanas. Este programa buscó proporcionar directrices e información al sistema educativo para promover la educación de calidad (Chaux, 2009).

Por otro lado, en cuanto a la política de la educación para la paz, tiene por objeto ofrecer oportunidades para desarrollar las destrezas, los conocimientos y los valores necesarios para la práctica de la resolución de conflictos, la comunicación y la cooperación en relación con cuestiones de paz y justicia. La educación para la paz puede aplicarse en sociedades en conflicto, post-conflicto y sociedades estables para lograr la solución pacífica de problemas (Harber, C., & Sakade, N., 2009).

A partir de lo expuesto anteriormente, sería idóneo que el gobierno y las instituciones fortalezcan los métodos de formación centrados en acciones y actitudes que promuevan la humanidad, la búsqueda de oportunidades y el bienestar social. La educación para la paz en un marco de ciudadanía social debe estar dirigida a recapacitar sobre los asuntos políticos que afectan la sociedad, así como abordar la diversidad, desarrollar la capacidad de altruismo, reconociendo las secuelas que tiene cada decisión política en las oportunidades de los demás; interesarse por el bienestar común y no en los intereses particulares de un grupo reducido de individuos; además reflexionar acerca de los actos que envuelven y afectan a los seres que conforman la comunidad (Quintero & Mejía, 2016).

De esta manera, es relevante el acompañamiento psicosocial a los niños y jóvenes víctimas del conflicto armado. Así, este acompañamiento debe informar acerca de los marcos institucionales, organizacionales a los que pueden acudir, así como la valoración de los efectos que ha tenido el conflicto sobre las familias de las víctimas y en las comunidades afectadas (Estrada, Ripoll & Rodríguez, 2010). En estas propuestas de políticas que brinden acompañamiento a las víctimas, hay que tener en cuenta el respeto por los mínimos éticos de la acción sin daño que preserven la dignidad humana, autonomía y libertad (Toro, 2011).

3. Algunos hechos estilizados acerca del conflicto armado y la educación

Como se mencionó previamente, en los contextos donde persiste el conflicto armado, como el caso de Colombia, ocasiona que el gasto en defensa aumente y la inversión en educación disminuya (Giha, Riveros & Soto, 1999).

Al respecto, el gasto en defensa y seguridad se ha mantenido elevado debido a los conflictos armados internos, a las olas de violencia presentadas en el país, entre otros hechos. Comparándolo con el gasto en educación, ha sido similar, y en algunas ocasiones ha sido inferior al gasto en defensa y seguridad, con las consecuencias que se han abordado en la revisión de la literatura.

Los niños y jóvenes han sufrido este conflicto interno de varias maneras. En primer lugar, los grupos armados ilegales reclutan menores de edad. Algunos menores se ven obligados a unirse, mientras que otros son atraídos por las posibilidades de dinero y aventura, así como por el poder asociado con el transporte de armas y formar parte de los temidos grupos armados. En segundo lugar, casi la mitad de la población desplazada forzada es menor de edad. En tercer lugar, casi todos han estado expuestos a la violencia en sus familias y comunidades a través de los medios de comunicación, incluyendo presencia en combates, tiroteos, bombas o secuestros. Además, la violencia en Colombia no se limita a los conflictos armados, ya que existen formas más frecuentes de violencia doméstica, urbana, pandillera y criminal que también afecta a los niños (Chaux, 2009).

Para el año 2002, el déficit de los recursos para atender a la población escolar era del 53%, la tasa de cobertura en educación primaria no aumentó, así como fue difícil el acceso de la población a la educación. El Estado no había cumplido con la obligación de gratuidad de la educación primaria, a pesar de que el 60% de la población total está por debajo de la línea de pobreza y de que los costos educativos son la principal razón para no asistir a la escuela primaria (Lerma, 2007).

Los niños y jóvenes expuestos al conflicto armado para el año 2008, no solo tienen menos probabilidades de ir a instituciones educativas, sino que también tienen menos posibilidades de terminar los estudios. La tasa de supervivencia en el último grado de primaria es 65% en las zonas pobres y que están directamente relacionadas con el conflicto armado, mientras que en las demás zonas alcanza 86% (Slezic, 2011).

Para el 2011 son cerca de 353,000 niños y jóvenes que desde la primaria abandonan los estudios. Así, el conflicto armado interno ha tenido profundas repercusiones para el desarrollo social del país, ya que el 17% de niños y jóvenes, unos 61,000, abandonan el colegio para unirse a pandillas y hacen uso ilegal de armas (Chamorro, 2013).

Los habitantes de las zonas rurales colombianas, víctimas de la exclusión social y el conflicto armado, sumaron casi ocho millones de personas que habían sido incluidas en el Registro Único de Víctimas para el año 2012, representando el 15% del total de la población colombiana. El 32% de ellas tiene menos de 18 años, y la mitad de estas son menores de 28.

Las violaciones a los derechos humanos y los quebrantos al derecho internacional humanitario contra los niños y jóvenes expuestos al conflicto son graves. Los menores han sido desplazados, reclutados, sometidos a violencia sexual, mutilados por minas y restos explosivos, secuestrados, desaparecidos y asesinados. La vulneración de sus derechos ha sido masiva. Del total de víctimas registradas en Colombia, casi medio millón tienen entre 0 y 5 años; 855,000 entre 6 y 11 años; más de un millón entre 12 y 17 años, y casi 1,6

millones entre 18 y 28 años. Por tanto, hay un total de 2,3 millones de niños, niñas y adolescentes víctimas (29,4% del total), y 1,6 millones de jóvenes entre 18 y 28 años (20%). En 2015 hubo más de 37,000 víctimas entre 6 y 12 años, y casi 24,000 entre 13 y 17 años. En total, están registrados hasta 2015 casi 8,000 casos de vinculación de niños y niñas a grupos armados (González, 2016).

Actualmente, se han alcanzado niveles altos de cobertura de primaria y secundaria. Sin embargo, son varios los niños y jóvenes que renuncian a sus estudios sin completar el colegio. Este contexto afecta más a las víctimas del conflicto armado y los que residen en zonas rurales. Las cifras de deserción a nivel nacional evidencian que entre 1995 y 2006 la tasa de deserción promedio fue de 5.6%, siendo mayor en los niveles de preescolar (7.3%), primaria (7.6) y secundaria (6.4%) (Arias, 2010).

En el año 2012 se calculó que casi el 70% de los reclutados por los grupos armados ilegales tenían menos de 15 años, siendo la representatividad de los niños indígenas reclutados nueve veces mayor a su peso en la composición étnica del país. El 57% procede de familias muy pobres con restricciones en el consumo de alimentos, y que se han desplazado como media 4,5 veces, principalmente por violencia y presiones económicas antes de ingresar a los grupo armados (González, 2016).

Las fuentes de dicha deserción escolar se encuentran directamente relacionadas, principalmente, con la crisis económica, el conflicto armado y la ausencia de gusto por la escuela. La primera y la tercera de estas razones representan el 55% de las causas de la deserción escolar a nivel nacional. Aún más crítica es la situación en ciertas zonas rurales que sufren con mayor severidad los efectos destructores de los actores armados, ya que puede llegar a explicar entre el 20% y el 100% del fenómeno de abandono escolar en esas poblaciones; especialmente, cuando sus pobladores deben salir de sus jurisdicciones debido al desplazamiento forzado al que son sometidos (Jiménez, 2012).

En el mundo hay 21 países que gastan más en defensa que en educación. Si recortaran su gasto militar en un 10%, esos países podrían escolarizar a 9,5 millones de niños y jóvenes que se encuentran privados de ingresar a la educación. Además, la infraestructura educativa, docentes y jóvenes han sido tomados como objetivos militares (Rojas, 2011).

En Colombia, las variables del conflicto han presentado cambios reveladores: el número de desplazados ha crecido constantemente, al igual que los homicidios y en general todos los indicadores de violencia que han generado profundas pérdidas de capital humano de niños y jóvenes colombianos (Rodríguez et al., 2011).

4. Reflexión Final

Este trabajo de revisión expone que los conflictos armados causan grandes daños y traen consigo consecuencias devastadoras para la calidad de la educación, la desigualdad y la cobertura de la misma. De acuerdo a Herrera, Díaz & Acevedo (2001), se ha venido presentando la vulneración a la integridad de niños y jóvenes debido al aumento del desplazamiento forzado y a la destrucción de la infraestructura de escuelas, colegios e instituciones educativas.

En el largo plazo, desde mi perspectiva, parece ser difícil restablecer la paz después de un período de conflicto debido a que los costos económicos y sociales de las guerras son altos y persisten durante años después del fin del conflicto. Pese a que la educación es el mecanismo fundamental para lograr superar los conflictos armados y establecer bases sólidas para construir una cultura alejada de formas ancladas a la violencia, al autoritarismo e intolerancia, no se tiene un pensamiento como este en nuestro país, generando que la brecha educativa sea cada vez mayor (Herrera, Díaz & Acevedo, 2001).

Desde el análisis a partir de la revisión se infiere que, a pesar de que Colombia tiene posiblemente el más dinámico marco legal para resguardar a los civiles desplazados y su acceso a los bienes básicos, en este caso a la educación, el conflicto armado se ha transformado en un obstáculo para el desarrollo humano. En particular, desde la literatura se estima que el conflicto armado ha privado a por lo menos 10 millones de niños y jóvenes de la posibilidad de educarse y han sido avocados al riesgo de ser víctimas de violaciones de los derechos humanos (Chamorro, 2013). De otro lado, el conflicto armado ha generado agresiones contra las instituciones y profesores del sistema educativo.

La educación es ante todo una inversión socialmente rentable, un mecanismo de redistribución del ingreso, una garantía de acceso equitativo a los medios de producción, al ejercicio de la ciudadanía, al perfeccionamiento de la democracia y a la construcción de la convivencia. No acceder a una educación de calidad debido al conflicto armado es perpetuar la pobreza y re-victimizar a la población inmersa en la violencia (Jiménez, 2002). Desde mi perspectiva esto deja en mayor vulnerabilidad social a las personas víctimas de la violencia por el conflicto armado y menor lugar a una paz estable y duradera.

La violencia en las instituciones educativas hace parte de las realidades del conflicto armado colombiano. Allí se evidencia con mayor intensidad las consecuencias del conflicto armado con mayores índices de pobreza, desempleo, hostilidad intrafamiliar y resentimiento social, con alta prevalencia de secuelas de orden físico, psicológico y social. Este escenario hace a los niños y jóvenes objetivo fácil de la delincuencia que los conlleva a hacer parte de los grupos armados y en algunos casos del narcotráfico. De no ser así, y ante la falta de opciones, su elección es protegerse de la violencia por intermedio de la

violencia, ocasionando que se aparten de las entidades educativas, deserten de estudiar, y así, extendiendo los círculos viciosos de pobreza, violencia y desigualdad (Uribe, 2011).

Dado lo anterior, los países con un prolongado conflicto armado como el de Colombia enfrentan un gran desafío, ya que la violencia tiene repercusiones económicas, políticas y culturales que deben mitigar. Rojas (2011), menciona que cuando el Estado falla en garantizar el derecho a la educación, prevalece el rezago del país durante las siguientes décadas.

El conflicto armado colombiano ha traído consigo alrededor de 10,000 muertes durante el periodo 2000 - 2009 y el desplazamiento forzado de casi tres millones de personas, siendo el segundo país con más desplazados forzados a nivel mundial. Este conflicto ha sido alimentado por el narcotráfico y que durante la década de los noventa. Por ejemplo, tanto los guerrilleros de izquierda como los paramilitares aumentaron sustancialmente su tamaño y fuerza con recursos del narcotráfico generando así que las poblaciones expuestas a este conflicto deserten de la educación y solo se concentren en su sobrevivencia.

Por otro lado, el apoyo familiar puede prevenir que los niños y jóvenes deserten de ingresar a los grupos armados por voluntad propia, incitándolos a ingresar a los colegios, así como mostrándoles las oportunidades que se abren cuando ingresan y permanecen en las instituciones educativas.

No obstante, la legitimidad del Estado ha disminuido a medida que la prestación de servicios educativos no ha mejorado y el conflicto armado ha sido creciente, lo que ha socavado la capacidad del gobierno para abordar la pobreza, el desarrollo económico y proporcionar educación básica a las víctimas de la violencia (Westendorf, 2016).

Las lecciones aprendidas en este trabajo incluyen que el gobierno debe crear sensibilidad con respecto a la inclusión del entorno cultural en el que los niños y jóvenes colombianos viven. También se necesita comprender los retos constantes a los que esta población se encuentra expuesta en un entorno de violencia. Igualmente, se deben incorporar programas flexibles e incluir la perspectiva de los niños y jóvenes en relación a las consecuencias físicas y psicológicas de la exposición a la violencia, así como que puedan acceder a programas educativos adaptables (Velsor-Friedrich et al., 2015).

5. Referencias

Arias, É. d. J. (2010). Situación del derecho a la educación, en los componentes de aceptabilidad y adaptabilidad, de niñas y niños víctimas del conflicto armado, en instituciones educativas públicas de Medellín.

Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar. (2016). La Educación Como Pilar Fundamental De La Seguridad Social En El Sector Rural. Asocajas

Bhattacharya, S., Sengupta, P., Pal, B., Choudhury, B., Chakraborty, S., & Roy, M. (2011). Violence against Education Community. *Economic and Political Weekly*, 46(2-7).

Brück, T., Di Maio, M., & Miaari, S. H. (2014). Learning the hard way: The effect of violent conflict on student academic achievement.

Campo, M. (2012). Manual para la Formulación y ejecución de Planes de Educación Rural Calidad y equidad para la población de la zona rural. Ministerio de Educación Nacional.

Chamorro, J. (2013). “La deserción escolar, un hijo del conflicto armado en Colombia”. Jimmy Chamorro Cruz - Senador de la República de Colombia 2014 – 2018.

Chaux, E. (2009). Citizenship competencies in the midst of a violent political conflict: The Colombian educational response. *Harvard Educational Review*, 79(1), 84-93.

Defensoría del Pueblo. (2014). Informe Estructural Situación de Riesgo por Conflicto Armado en la Costa Pacífica Cauca Municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay.

Delgado, M. (2014). La educación básica y media en Colombia: retos en equidad y calidad.

Estrada, Á., Ripoll, K., & Rodríguez, D. (2010). Intervención psicosocial con fines de reparación con víctimas y sus familias afectadas por el conflicto armado interno en Colombia: equipos psicosociales en contextos jurídicos. *Revista de estudios sociales*(36), 103-112.

Giha, Y., Riveros, H., & Soto, A. (1999). El gasto militar en Colombia: aspectos macroeconómicos y microeconómicos. *Revista de la CEPAL*.

Gómez Jiménez, M. (2002). Aumenta deserción escolar. *Revista Semana*.

González, G. (2002). Los niños de la guerra. Premio Nacional de Periodismo. Bogotá: Planeta.

González Bustelo, M. (2016). El verdadero fin del conflicto armado: Jóvenes vulnerables, educación rural y construcción de la paz en Colombia.

González, G. (2004). Educación y conflicto armado. (P. C. S.A., Ed.) Altablero: El periódico de un país que educa y que se educa, pág. 196.

Grogger, J. (1997). Local Violence and Educational Attainment. *The Journal of Human Resources*, 32(4), 659-682.

Harber, C., & Sakade, N. (2009). Schooling for violence and peace: how does peace education differ from 'normal'schooling?. *Journal of Peace Education*, 6(2), 171-187.

Las Naciones Unidas y la asistencia humanitaria. (Mayo de 2013). Las Naciones Unidas.

Herrera, M., Díaz, A., & Acevedo, R. (2001). Conflicto educativo y cultura política en Colombia. *Nómadas (Col)*(15), 40-49.

Jaramillo, M. (2012). Ambientes educativos y territorios del miedo en medio del conflicto armado: estudio sobre escuelas del Bajo y Medio Putumayo. *Revista colombiana de educación*(62), 21-39.

Lasso, P. (2013). Cuando se vive el desarraigo. Educación y desplazamiento forzado: una mirada desde el Distrito de Aguablanca, Cali, Colombia. *Revista científica Guillermo de Ockham*, 11(2).

Lerma, C. (2007). El derecho a la educación en Colombia. *Foro Latinoamericano de Políticas Educativas-FLAPE*.

Lizarralde, J. (2003). Maestros en zona de conflicto. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 1(2), 79-114.

Márquez, A. (2014). El papel de la educación en situaciones de posconflicto: estrategias y recomendaciones. *Hallazgos*, 11(21), 223-245.

Medina Uribe, H. (2011). Educación y conflicto. El colombiano

McDonald, C., Deatrick, J., Kassam-Adams, N., & Richmond, T. (2011). Community violence exposure and positive youth development in urban youth. *Journal of community health*, 36(6), 925.

McGill, T., Self-Brown, S., Lai, B., Cowart-Osborne, M., Tiwari, A., LeBlanc, M., & Kelley, M. (2014). Effects of exposure to community violence and family violence on school functioning problems among urban youth: The potential mediating role of posttraumatic stress symptoms. *Frontiers in public health*, 2.

Méndez, L., Calderón, N., & Fernanda, M. (2007). *Análisis de políticas educativas en el marco de calidad y cobertura para la población infantil desplazada en el nivel preescolar*.

Ministerio de Educación Nacional. (2016). Sistema Educativo Colombiano. (Mineducación, Ed.) Bogotá, Colombia.

Ministerio De Educación Nacional. (2004). Poblaciones Cobertura y calidad para los más vulnerables. Ministerio de Educación Nacional.

Ministerio De Educación Nacional. (2002). Escuelas Normales Superiores, más cerca del sector rural. Ministerio de Educación Nacional.

Montoya, A. (2008). Niños y jóvenes en la guerra en Colombia: Aproximación a su reclutamiento y vinculación. *Revista Opinión Jurídica*, 7(13), 37-51.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura. (2011). Una crisis encubierta: conflictos armados y educación. Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo, UNESCO, París.

Osofsky, J. D. (1999). The impact of violence on children. *The future of children*, 33-49.

Osorio, F. E. (2001). Entre la supervivencia y la resistencia. *Universidad Javeriana*.

Pedersen, J., & Sommerfelt, T. (2007). Studying children in armed conflict: data production, social indicators and analysis. *Social Indicators Research*, 84(3), 251-269.

Perfetti, M. (2004). Estudio sobre la educación para la población rural en Colombia: Mauricio, Perfetti (2004) Educación para la Población Rural en Brasil, Chile, Colombia, Honduras, México, Paraguay y Perú. Santiago de Chile: FAO-UNESCO.

Poirier, T. (2012). The effects of armed conflict on schooling in Sub-Saharan Africa. *International Journal of Educational Development*, 32(2), 341-351.

Red de Medios Alternativos y Populares. Relación entre la Educación y el Conflicto Social y Armado en Colombia (2011). REMAP.

Quintero, M. (2016). Conflicto armado, variables socio-económicas y formación ciudadana: un análisis de impacto*/Armed conflict, socio-economic variables and citizenship formation: an impact analysis/Conflito armado, variáveis socioeconômicas e formação cidadã: uma análise de impacto. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 14(1), 147-147.

Rodríguez, A., Vega, E., Alvis, L., & Castro, R. (2011). Efectos del conflicto armado en Colombia en la cobertura educativa del departamento de Bolívar en el periodo 1995-2008. *Semestre Económico*, 14(28).

Rodríguez, C., & Sánchez, F. (2010). Books and guns: The quality of schools in

conflict zones (Documento CEDE 38). Universidad de los Andes, Facultad de Economía.

Rodriguez, C., & Sanchez, F. (2012). Armed conflict exposure, human capital investments, and child labor: Evidence from Colombia. *Defence and peace economics*, 23(2), 161-184.

Romano, P. P. O. (2015). Crime Exposure and Educational Outcomes in Mexico.

Romero, F. (2013). Conflicto armado, escuela, derechos humanos y DIH en Colombia. *Análisis Político*, 26(77), 57-84.

Shepard, J., & Farrington, D. (1995). Preventing crime and violence: Pre school education, early family support and situational crime prevention can be effective. *British Medical Journal*, 310(4), 271-272.

Shemyakina, O. (2011). The labor market, education and armed conflict in Tajikistan.

Slezic, L. (2011). La educación y los conflictos armados: la espiral mortífera. Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo.

Toro, D. M. (2011). *Acompañamiento psicosocial a niños y niñas víctimas del conflicto armado en Colombia: un escenario para la acción sin daño*. Universidad Nacional de Colombia. PIUPC.

Vargas, J, Gamboa, L., & García, V. (2014). El lado oscuro de la equidad: violencia y equidad en el desempeño escolar. *Desarrollo y Sociedad*(74).

Velsor-Friedrich, B., Richards, M., Militello, L., Deane, K., Scott, D., Gross, I., & Romero, E. (2015). The impact of community violence on school-based research. *The Journal of School Nursing*, 31(6), 397-401.

Verwimp, P., & Van Bavel, J. (2013). Schooling, violent conflict, and gender in Burundi. *The World Bank Economic Review*, 28(2), 384-411.